

UN PAÍS QUE LUCHA POR
**LA PAZ Y
LA SOLIDARIDAD**



TU IZQUIERDA



La dramática crisis que vive la Humanidad (alimentaria, energética y financiera), consecuencia del sistema capitalista, del imperialismo, ha acentuado los rasgos antidemocráticos de las instituciones internacionales: ha potenciado el uso de la fuerza contraviniendo el derecho internacional, el aumento sustancial del gasto destinado a armamento y a la I+D en programas militares, y la guerra como herramienta para garantizar que los países dependientes cuenten con los canales de suministro de recursos energéticos.

La Carta Fundacional de las Naciones Unidas o el derecho internacional son burlados sistemáticamente al no contar con un "gobierno democrático del mundo", con unas Naciones Unidas rediseñadas, reformuladas, que sean la auténtica expresión democrática del mundo del siglo XXI.

En esta fase bárbara y criminal del capitalismo, no sólo se ataca el bienestar de las personas en los países desarrollados, haciéndonos retroceder en derechos sociales, sino que también se multiplican las desigualdades respecto a los países empobrecidos, abandonando a millones de personas a su suerte, condenándolas al hambre, a la muerte por falta de medicación y a la pobreza extrema.

La concentración de la riqueza en muy pocas manos, no sólo es depredadora de las conquistas sociales alcanzadas en el siglo XX, sino que también destruye la biodiversidad y la paz.

En nuestro contexto, la actual Unión Europea, la diseñada por y para los mercaderes, desde el Tratado de Maastricht al de Lisboa, no sólo no ha contribuido a avanzar hacia una arquitectura democrática del mundo, ni hacia un desarme progresivo, ni a exigir el cumplimiento del derecho internacional o el respeto de los derechos humanos. Muy al contrario: ha favorecido el mantenimiento del actual desorden internacional, las desigualdades, la guerra y la desprotección a los pueblos que demandan justicia social.

1. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA QUE LAS MULTINACIONALES ESTÉN POR ENCIMA DE LA DEMOCRACIA

La Unión Europea y terceros países negocian y han aprobado diferentes tratados de comercio e inversión. Las negociaciones en curso, de tratados con consecuencias tan importantes como el TTIP o el TiSA, se desarrollan con absoluta falta de transparencia, tienen por objetivo establecer un gran mercado trasatlántico que consagraría el dominio de las grandes corporaciones transnacionales en detrimento de los ciudadanos en todo el mundo.

Con el argumento de relanzar la economía, estas negociaciones tienen por objetivo rebajar las regulaciones laborales, sociales, económicas, sanitarias, educativas, culturales y ambientales como medio de mejorar la competencia –a costa de la mayor parte de la población- de las grandes transnacionales con otros bloques económicos del mundo y aumentar su margen de beneficios.

Para conseguirlo, se implantan dos mecanismos antidemocráticos que aseguran lo que los negociadores llaman la armonización normativa que no es más que una regulación a la baja de la legislación vigente. Por un lado el Consejo de Cooperación Reguladora (CCR), una especie de gobierno de las transnacionales que dictaminará lo que se puede o no se

puede legislar en asuntos que afecten a sus intereses y por otro el mecanismo ISDS (o ICS), de resolución de conflictos entre empresas y estados, que garantiza las inversiones – y sus previsiones futuras de beneficios- de cualquier empresa ante potenciales políticas estatalizadoras o remunicipalizadoras, conflictos que habrían de resolver tribunales privados de arbitraje fuera de todo control democrático.

Estos proyectos negociados por y para las transnacionales es una amenaza extremadamente grave para los derechos laborales, sociales, culturales, ambientales y democráticos ya que entregaría a intereses privados la soberanía de los estados y de los pueblos. Las consecuencias de una posible ratificación de este tratado afectarían a amplios sectores de la población, posibilitando políticas que:

- Limitarían o eliminarían derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva
- Amenazarían la pervivencia de servicios públicos como la sanidad, la educación o el sistema de pensiones
- Pondrían definitivamente en manos privadas la gestión de los residuos, del transporte o del saneamiento y distribución de aguas
- Pondría en grave riesgo la seguridad alimentaria al permitir los transgénicos en la agricultura, el ganado vacuno hormonado o el porcino y el aviar clorados
- Aumentaría la presión sobre los recursos naturales, potenciando técnicas extractivas invasivas como el *fracking* e importando productos altamente contaminantes como las arenas bituminosas
- Reduciría la biodiversidad al apostar por la agroindustria que implica pérdidas de variedades locales y razas autóctonas al tiempo que propiciaría la paulatina desaparición de los paisajes rurales tradicionales
- Haría desaparecer el principio de precaución sobre el uso de los productos químicos al no poder regularlos
- Amenazaría la privacidad personal al permitir un mayor acceso y control sobre datos privados por parte de las corporaciones
- Aumentaría la mercantilización de la salud al reforzar las patentes farmacéuticas frente a los genéricos

Y que, en definitiva, permitiría la paulatina apropiación del poder político y judicial por parte del poder económico de las grandes corporaciones transnacionales.

Por todo ello, Izquierda Unida se opone firmemente a este modelo de tratados de comercio e inversión, trabajando para frenar las negociaciones del TTIP o el TiSA y derogando los ya aprobados como el CETA o el JEFTA.

2. TRABAJAR POR LA PAZ

Apostamos por una nueva política de relaciones internacionales y acción exterior de España basada en el desarme, la cooperación, la prevención pacífica de los conflictos, la

prohibición de armas de destrucción masiva y el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas.

Queremos contribuir al rediseño y reconstrucción de la Naciones Unidas para que sus 193 Estados miembros sean quienes decidan realmente el gobierno del mundo, con una estructura más participativa y democrática.

IU aboga por una nueva arquitectura de la seguridad mundial que se base en la seguridad humana y la seguridad compartida, y ésta debe tener como objetivo el desarme y poner fin a la principal amenaza mundial: el hambre y la enfermedad en los países empobrecidos, apostando por la prevención diplomática de los conflictos y el control real del comercio de armas.

3. NO A LA OTAN

Las acciones militares que la OTAN desarrolla desde 1990, contraviniendo el mandato de la Carta de las Naciones Unidas, han causado centenares de miles de muertes, devastación y una desestabilización internacional sin precedentes desde el final de la segunda guerra mundial. Afganistán, Iraq, Libia o Siria, las malditas guerras provocadas para garantizarse el suministro de petróleo y el dominio de lugares geoestratégicos del mundo, requieren la puesta a punto de la maquinaria militar para proseguir en su barbarie organizada.

La OTAN mantiene un Concepto Estratégico que le permite actuar en cualquier parte del mundo sin la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en contra del derecho internacional. Por eso afirmamos que la OTAN supone una amenaza para la Paz.

Las bases de la OTAN son una subordinación de nuestra seguridad a la de los EEUU y la cesión de nuestra soberanía a los Estados Unidos de Rota y Morón. Esa subordinación se produce con un Estado que reconoce prácticas de tortura a detenidos, que detiene ilegalmente, que practica ejecuciones extrajudiciales en todo el mundo, que practica un espionaje generalizado y sigue manteniendo secuestrados en la cárcel de Guantánamo.

Izquierda Unida desde su compromiso de conseguir por la Paz y Cooperación, se ha opuesto a las maniobras “Trident Juncture 2015”, al uso del territorio para esos ejercicios de guerra que sólo pretenden crear más devastación e inestabilidad en el mundo.

Los gobiernos del PSOE y del PP han mantenido de forma invariable una total subordinación de nuestra seguridad a la de los EEUU cediendo parte de nuestra soberanía nacional y convirtiendo las bases de Rota y Morón en bases fundamentales para las guerras de rapiña en África y Oriente Próximo, contraviniendo el Referéndum de la OTAN de 1986.

- Exigimos la retirada de las bases de la OTAN en España y trabajaremos pro la disolución de esta alianza militar.

4. DESARME Y REDUCCIÓN DE GASTOS MILITARES

En España nos encontramos ante un enorme gasto militar, la contratación de programas militares muy costosos y unas fuerzas armadas sobredimensionadas. Denunciamos:

- Que numerosos estudios avalan que se está produciendo **fraude e improvisación en el gasto militar** (23.577 millones de forma directa e indirecta en 2018). En el Ministerio de Defensa la opacidad y la falta de transparencia son habituales. Los concursos, contratos, ventas de patrimonio, exportaciones de armas no son claros, lo que permite casos como el de la industria militar Instalaza, que ocultó información de 23 contratos por un importe de 29,7 millones. Instalaza es una empresa de la que fue consejero Pedro Morenés. Esta empresa pidió una indemnización de 40 millones al Estado después firmar el Tratado de prohibición de las bombas de dispersión (clúster) que esta empresa fabricaba. Sigue teniendo contratos con el Ministerio de Defensa del que Morenés es titular.
- El elevado coste del mantenimiento de unas **fuerzas armadas sobredimensionadas**, así reconocido por el propio ministro (un 1,6% del PIB según el Centro Delàs).

Programas de armas, que tienen sumido al Estado en una colosal deuda que alcanza los 20.000 millones de euros. Pero el Gobierno de Sánchez continúa aumentando el gasto, con un plan seguidista de las políticas del anterior gobierno que pretende acercarnos progresivamente al 2% del PIB que exige la administración Trump. Por todo ello, proponemos:

- **Reducir el gasto militar:** Revisar los contratos del Ministerio de Defensa y reducir drásticamente su partida.
- **Control y transparencia en el comercio de armas:** Garantizar que el comercio de armas cumple los requisitos de la Ley de comercio de armas, las directivas comunitarias y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Impedir las transferencias de armas que puedan permitir o incrementar vulneraciones de derechos humanos.
- **Apostar por la educación por la paz. Rechazar el programa de “cultura de defensa”:** En un contexto de violencia, racismo, discriminaciones, etc. es necesario impulsar la educación por la paz, no insistir en promocionar la “cultura de defensa” y, con ella, hacer una apología del militarismo y el armamentismo.
- **Plena aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas:** España debe ser activa para que el TCA sea un instrumento efectivo para reducir las alarmantes cifras de muertes, heridos y refugiados provocadas por el descontrol y la proliferación de armas.
- **Sumarse al “Compromiso humanitario” por la eliminación de las armas nucleares:** Impulsar la adopción de un Tratado de prohibición de las armas nucleares.
- **Apoyar la moratoria internacional para evitar el desarrollo de robots asesinos:** El Gobierno debe apoyar el proceso civil y diplomático internacional para conseguir una moratoria de estas armas.

5. SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN

Debemos incrementar nuestra solidaridad con todos los pueblos que sufren las calamidades del hambre, la enfermedad y la pobreza. Denunciamos que el retraso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la consecuencia lógica del sistema capitalista, que requiere de la expropiación de los recursos naturales de los países empobrecidos. El caso de la hambruna en Somalia es paradigmático. Mientras los y las somalíes se mueren de hambre, los pesqueros europeos faenan armados para garantizar el negocio.

El ahorro en el gasto armamentístico debe ser una de las fuentes básicas de financiación para cumplir los plazos de los ODM. La financiación para localizar el empleo, los servicios básicos, la educación y cultura contribuirá a poner fin al drama de las migraciones masivas, que son tratadas por el sistema como una amenaza.

Coincidimos con Jean Ziegler en calificar cada muerte por hambre como un asesinato. Nos sumamos a su idea de crear un tribunal internacional para sentar en el banquillo tanto a los especuladores financieros como a los del precio de alimentos.

Por todo ello, pedimos:

- Que en los acuerdos comerciales de la UE se exija de forma real el cumplimiento de los Derechos Humanos (DD.HH.).
- Apoyar programas de defensa de los DD.HH., de atención a las víctimas y desplazados.
- Considerar la Cooperación al Desarrollo como una política pública y denunciar el desmantelamiento de la cooperación a través de la desaparición de los fondos destinados a la misma.
- Que en tiempos de crisis se aumente la solidaridad, por lo que pedimos un aumento de los recursos destinados a Cooperación siempre que esta no se mercantilice ni se privatice en manos de grandes empresas.
- Que los fondos de desarrollo no sirvan para fortalecer las políticas de privatización en los países de destino (ejemplo: privatización del agua en América Latina).
- Que con dinero público no se realicen alianzas público privadas (ONG's y Transnacionales).
- Acabar con el bipartidismo en el destino de las subvenciones de cooperación. La mayor parte de los fondos actuales se reparten entre organizaciones cercanas al PSOE, al PP y a la Iglesia Católica. Defendemos el carácter plural de la ayuda a la Cooperación.
- Cesión del 0,7% del PIB a políticas de cooperación.

6. INTERNACIONALISMO

Vivimos en un momento en el que a la crisis financiera del capitalismo se le ha sumado una dramática crisis alimentaria y una crisis energética y ambiental producida por un sistema que se fundamenta en el afán de lucro en lugar del bien común.

La guerra se despliega para poner los recursos naturales del planeta al servicio de los intereses del capital transnacional y de mantener el propio negocio de la guerra. Creación de un clima de tensión constante mediante la fabricación de enemigos permanentes. La guerra "antiterrorista" se convierte en un magnífico instrumento para dominar territorios ricos en gas, petróleo, uranio, agua, nuevos materiales como el coltán etc. y ponerlas en manos de las multinacionales, también para desplegar tropas y establecer nuevas instalaciones militares a partir de las necesidades geoestratégicas de los EEUU y sus aliados.

De los intereses económico-militares solo podemos esperar la lógica de la máxima ganancia y la acumulación de poder. Y todo ello en el contexto de la crisis energética, financiera y alimentaria, social y medioambiental, una crisis sistémica, la del capitalismo, que él mismo ha generado y que amenaza a una parte muy importante de la Humanidad, la más empobrecida, a seguir padeciendo el azote del hambre o la enfermedad por males fácilmente curables: hambre, enfermedad o condiciones insalubres que inexorablemente llevan a la muerte a 80.000 personas diariamente, de entre ellas, cada 10 segundos a un niño o niña menor de 10 años. Este genocidio silencioso mantiene a más de 925 millones de personas en una hambruna permanente.

La guerra sigue formando parte de la intimidación y dominio de los Estados Unidos de América y sus aliados para imponer por la fuerza y fuera del mandato explícito de la Carta de Naciones Unidas, su hegemonía y el control de los corredores de suministro energético. La intimidación y dominio del imperialismo, se confronta con cualquier intento de basar las relaciones internacionales en la Carta de Naciones Unidas, en un proyecto democrático del gobierno del mundo basado en el desarme, la justicia social, los derechos humanos, la paz, la educación y la salud y el bienestar de toda la Humanidad. Un verdadero gobierno democrático del Mundo con unas Naciones Unidas rediseñadas, refundadas y democráticas, hubiese resuelto hace décadas la creación del Estado de Palestina, o el derecho del pueblo saharauí a su autodeterminación en el proceso de descolonización del territorio no autónomo del Sahara Occidental, o el fin del bloqueo de los EEUU a Cuba, y el reconocimiento del derecho de autodeterminación de todos los pueblos del mundo.

La desregulación de los mercados y la financiarización de la economía ha sido y es la guía de la política exterior de la UE, en algunos casos por la política dependiente de la política exterior de los EEUU, y en la mayoría como forma de defender los intereses de los diferentes monopolios europeos. Esa dependencia deja a la UE sin capacidad para jugar un papel activo y autónomo en las relaciones internacionales, en la perspectiva de construir el gobierno democrático del mundo, el desarme, la paz y la consecución de todos los derechos humanos. Muy al contrario: la UE nunca ha suspendido sus acuerdos de asociación con regímenes como el de Ben Ali, Mubarak, Netanyahu o Mohamed VI a pesar de la cláusula condicionante del respeto a los derechos humanos.

Estados miembros de la UE fueron parte activa en la guerra de Libia y en la preparación de escenario bélico en Siria, aunque sea a costa de reforzar a los salafistas, además de ser actores de la guerra en Yemen a través de su apoyo político y armamentístico al

régimen saudí. La colaboración con los regímenes como el de Arabia Saudí, o Qatar demuestra la primacía de los intereses económicos frente a los derechos humanos.

De la misma manera, las relaciones con América Latina y Caribe se basan fundamentalmente en los intereses de las multinacionales europeas para hacerse con el control de recursos naturales estratégicos sobre la base de acuerdos de libre comercio que no tienen en cuenta las asimetrías, la complementariedad o el comercio justo. Hoy la región se encuentra en un proceso de desestabilización y ataque a las fuerzas progresistas en el que esas mismas empresas juegan un papel central, enfrentándose a los avances sociales de los pueblos latinoamericanos y del Caribe. La mayor confrontación contra el imperialismo en América Latina la libran los mecanismos de integración regional impulsados fundamentalmente por los gobiernos progresistas. Las instituciones creadas desplazan a las antiguas en las que predominaba la hegemonía estadounidense (TLCs, OEA...). De esta manera se han creado la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba-TCP), Mercosur, Unasur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

Reiteramos nuestros compromisos:

- A contribuir al establecimiento de unas relaciones internacionales basadas en la Carta de Naciones Unidas, en el reconocimiento a la soberanía de los pueblos, en el gobierno democrático del mundo, el desarme, la paz, la justicia social, la salud, el bienestar y la exigencia imperativa de todos los derechos humanos.
- A poner fin al genocidio del hambre, a señalar y condenar a sus autores materiales, a cumplir y hacer cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
- A luchar contra el terrorismo desde sus causas y con el derecho internacional. Contra el terrorismo no hay atajos y no puede servir de excusa para retroceder en derechos a cambio de seguridad.
- En la defensa de alcanzar acuerdos comerciales que tengan en cuenta las asimetrías, la complementariedad y el comercio justo evitando así tratados de libre comercio. Exigiendo a los firmantes acuerdos similares en materia de protección social y respeto medioambiental que permitan exportar bienestar y no fuercen la miseria.
- A incentivar el desarme y la prohibición y destrucción ecológica de todo el arsenal de armas de destrucción masiva biológicas, químicas y nucleares.
- A mantener la exigencia de la creación del Estado Palestino con capital en Jerusalén, del fin de la ocupación israelí de los territorios ocupados y hacer efectivo el derecho al retorno de todos los refugiados según lo recogido en la Resolución 194/48 de la ONU. A apoyar la campaña internacional del Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra Israel.
- A comprometernos con el proceso de descolonización del territorio no autónomo del Sahara Occidental y el derecho de autodeterminación del pueblo saharauí y en la exigencia que España, como antiguo país administrador del Sahara Occidental, asuma su responsabilidad como garante de la administración del proceso de descolonización.

- A la salida inmediata de la OTAN y su disolución y el repliegue de todas las fuerzas militares de los EEUU de América desplegadas en todos los continentes, entre ellas, las bases de Morón y Rota. En esta última reiteramos nuestra rotunda oposición a la instalación del escudo antimisiles.
- A multiplicar nuestra solidaridad con los gobiernos de izquierda y de progreso de América Latina y Caribe, con la Revolución Cubana, la Bolivariana y con las nuevas propuestas regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y oponernos activamente a los golpes de estado en diferentes formas que se están dando, así como al reconocimiento de los golpistas.

En definitiva, se trata de reiterar nuestro compromiso firme de construir la única alternativa posible a esta crisis sistémica provocada por el capitalismo, esto es, el Socialismo del siglo XXI.